

C.A. de Santiago

Santiago, veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de los motivos undécimo a décimo quinto y vigésimo quinto, que se eliminan.

**Y se tiene, en su lugar y además presente:**

**Primero:** Que respecto del proceso conocido por esta Corte, resultan de interés los siguientes antecedentes:

1.- Que la acción incoada persigue se indemnice el daño moral sufrido directamente a la demandante y a su vez, como víctima de aquel infringido por la detención ilegal, tortura y desaparición de su madre, Maria Rebeca Espinoza Sepúlveda, estando calificada como víctima N° 4.536 en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión nacional de Prisión Política y Tortura.

2.- Que en los autos rol C-2569-2009, juicio ordinario de indemnización de perjuicios seguidos ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 26 de noviembre de 2009, se rechazó la demanda civil presentada por la actora junto a sus hermanos, fundada en la responsabilidad civil extracontractual del Estado, por la detención, torturas y posterior desaparición de su madre, tanto por la excepción de pago como la de prescripción extintiva de la acción civil.

3.- Que dicha sentencia, habiendo sido luego revocada y acogida en segunda instancia en autos 2803-2010 por esta Corte, fue finalmente anulada por la Corte Suprema, al acoger recurso de casación en el fondo en causa 6920-2011, por determinación de 12 de septiembre de 2012, en sentencia de reemplazo en que se rechazó la acción por encontrarse prescrita la acción civil indemnizatoria.

**Segundo:** Que, el recurso que se revisa, pretende que, adicionalmente a lo concedido, se reconozca y declare la responsabilidad del Estado de Chile, por la detención ilegal, tortura y desaparición de la madre de la actora, resarciendo el daño moral que este hecho le ocasionó como hija a la demandante, disponiendo la correspondiente indemnización, afirmando que en este caso al acogerse la excepción de cosa juzgada, se ha hecho primar



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QZGNXXDCFHX

lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, prescindiendo de la normativa internacional vigente y aplicable al caso.

Sostiene que se vulnera con ello lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile “ en que el propio Estado hizo reconocimiento expreso de responsabilidad internacional, en presentación de febrero de 2018, concluyendo que la citada Corte afirma que Chile no puede establecer obstáculos, como la cosa juzgada, para impedir a las víctimas acceder a un recurso efectivo ante tribunales de justicia, para ser debidamente reparadas, resultando irrelevante una excepción fundada en ella, en relación con el ejercicio de una acción civil que pretende reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de delitos de la comisión de crímenes de lesa humanidad.

**Tercero:** Que esta Corte, analizados los antecedentes señalados, estima que la argumentación detallada por el tribunal *a quo*, en el fallo apelado, que sostiene, en su concepto, el rechazo de la pretensión hecha valer, no obsta al acogimiento de la demanda en esta parte, dado que con ello no se desvirtúa la legalidad del procedimiento seguido antes para resolver la misma materia, en los que se declaró la prescripción de la acción civil indemnizatoria, intentada contra el Estado de Chile, sino establecer que la institución de la cosa juzgada no puede servir de excusa al mismo para incumplir su deber de reparar íntegramente los daños causados con las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes.

Ello en aplicación del artículo 1º de la Convención Americana de Derechos humanos, que establece dos de las obligaciones más importantes que nacen para los Estados partes, la de respetar los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce. Así, convencionalmente para el Estado de Chile y demás Estados partes, las consecuencias o efectos jurídicos de estas obligaciones son la exigibilidad inmediata de respecto de los derechos humanos y en el plano individual su deber de emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción, estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos en forma íntegra.

**Cuarto:** Que, en esta materia, la Excma. Corte Suprema lleva fijando un criterio jurisprudencial, en donde, por medio del control de



constitucionalidad o convencionalidad ha decidido dejar sin aplicación el instituto de la cosa juzgada, cuando ella perpetúa la conculcación de alguna clase de derecho fundamental o de algún derecho humano que ha de ser respetado (roles 36319-19, 82303-2021, 144348-22).

Tal razonamiento se sustenta en una adecuada coherencia e integración de la normativa internacional al ordenamiento nacional, más si ella se relaciona con el deber de reparación integral citado.

En este caso, un razonamiento distinto, produce como efecto un desconocimiento de dicha obligación, dándole preeminencia a un importante instituto procesal, pero que no puede representar un obstáculo o una restricción desproporcionado a la posibilidad de obtener tal reparación. Implicaría no solo invocar disposiciones de Derecho interno para justificar el incumplimiento del deber de otorgar una reparación integral que impone un tratado internacional sobre derechos humanos ratificado y vigente, sino además implicaría comprometer una vez más la responsabilidad internacional del Estado al privar a la recurrente por segunda vez del derecho a la tutela judicial efectiva, que bajo la interpretación de la Corte Interamericana comprende la obligación estatal de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos humanos y fundamentales.

**Quinto:** Que, efectuado entonces el control de convencionalidad, que le corresponde a este tribunal como integrante del Estado, aparece de modo evidente en este proceso que la excepción de cosa juzgada en relación con el ejercicio de la acción civil presentada, derivado de la comisión de este tipo de ilícitos, no ha debido ser invocada por el Estado de Chile, dejando de aplicar disposiciones inherente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que tal defensa, fundada en la norma del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no debió ser acogida, pues prima en tal situación, la normativa internacional citada, que impone al Estado el deber de reparar íntegramente las graves violaciones a los derechos humanos que se demandan en estos autos.

**Sexto:** Que, rechazada la excepción de cosa juzgada, corresponde concluir también la procedencia de la acción deducida por la demandante en cuanto reclama también la indemnización del daño extra patrimonial sufrido por la detención ilegal y posterior desaparición forzada de su madre doña



Rebeca María Espinoza Sepúlveda. Para ello resulta conveniente tener en cuenta que el daño moral, en su concepción más actual, consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, ampliando el concepto desde el mero precio del dolor, hacía la afectación de intereses extrapatrimoniales entendidos como “aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento del cambio y los derechos constitucionalmente garantizados a las personas (Díaz Schwerter, José Luis, “El daño Extracontractual Jurisprudencia y Doctrina, edición 1998, pag. 88) todo esto amparado a su vez, en la voz “todo daño” utilizada por el artículo 2329 del Código Civil, para definir los daños indemnizables, la que resulta entonces omnicomprendiva.

Este menoscabo, por su índole netamente subjetiva, cuyo fundamento arranca de la propia naturaleza afectiva del ser humano, no es de orden puramente económico y no implica, en consecuencia, un deterioro real en el patrimonio de quien lo sufre, susceptible de prueba y de determinación directa, por lo que queda enteramente entregado a la regulación prudencial de los jueces de instancia, tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquella que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado (SCS Rol N° 17842-2019 de 11 de octubre de 2019)

**Séptimo:** Que, acreditados como han sido, los hechos materia de la demanda, su contexto, el efecto causado, la pérdida de su progenitora, en las condiciones en que se produjo, cambió radical y definitivamente su vida, debió rehacerla, viviendo en distintas casas de familiares por el lado de su padre, de la cual está alejada y la que por temor a represalias por cuidarla, debió optar por internarla hasta cumplir la mayoría de edad, efectos que se extienden hasta el día de hoy.

**Octavo:** Apreciando entonces la prueba rendida en este proceso, detalladas en los considerandos sexto, séptimo y octavo del fallo que se revisa y los hechos que fundan la demanda, se determina prudencialmente la indemnización del daño moral -que fueron excluidos por efectos de la cosa juzgada que se acogió por el tribunal *a quo*- en \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos), suma a la que deberá adicionarse la de \$30.000.000 que



se fijó en la sentencia que se revisa (en el motivo vigésimo tercero). De este modo, el daño moral a cuyo pago se condenará el demandado, asciende a la suma total de \$80.000.000, la que se reajustará conforme la variación del índice de Precios al Consumidor a partir de la ejecutoria de este fallo y devengará intereses desde que se incurra en mora, hasta el pago.

En esta determinación, la Corte considera lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la que fija la obligación de todo Estado de velar porque se garantice a la víctima de un acto que vulnere un derecho protegido por la Convención, la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, criterios que permiten regular el resarcimiento en la suma indicada.

Por estas consideraciones, de conformidad con las normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 5, 6, 38 y 19 numerales 22 y 24 de la Constitución Política de la República y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que:

**I.- se revoca** la sentencia apelada de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, en los autos C-5533-2022, caratulados “Latorre con Fisco de Chile” en cuanto acogió la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada, respecto de la indemnización por la desaparición forzada de la madre de la demandante **y en su lugar se declara** que ella queda rechazada; y, en consecuencia, tales hechos no quedan excluidos de la acción indemnizatoria.

**II.- se confirma**, en lo demás apelado, la sentencia en alzada, **con declaración que se eleva a \$80.000.000**, la suma total que por concepto de daño moral deberá pagar el Fisco de Chile a la demandante, mas reajustes desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada, e intereses corrientes para operaciones reajustables desde que se constituya en mora, hasta el pago efectivo.

Acordada con el voto en contra de la ministra señora Rojas Moya, la decisión de revocar la sentencia apelada y rechazar la excepción de cosa juzgada, quien estuvo por confirmar el fallo en alzada, en todas sus partes, porque, en su concepto, se configuran todos los requisitos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil –norma aplicable en la especie- en relación a



la acción de indemnización de perjuicios que se dedujo ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol N°2569-2009.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, devuélvanse.

Redacción del abogado integrante Manuel Luna Abarza y de la disidencia, su autora.

Civil N° 17081-2023 (Acumulada N° 17082-2023).-



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QZGNXXDCFHX

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M., Carolina S. Brengi Z. y Abogado Integrante Manuel Domingo Antonio Luna A. Santiago, veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QZGNXXDCFHX